

FALLO / EN SAN JOSÉ DE APARTADÓ ESPERAN QUE EJÉRCITO LOS PROTEJA

La comunidad que le ganó tutela a la brigada

NÉSTOR ALONSO LÓPEZ

Enviado Especial de EL TIEMPO

SAN JOSÉ DE APARTADÓ

En la Comunidad de Paz de San José de Apartadó temen que si los ataques contra ellos continúan, llegarán a ser insuficientes las piedras de su 'Monumento a la Memoria' para inscribir a los futuros muertos.

En el parque de este corregimiento, a 45 minutos de Apartadó, al lado de un quiosco con techo de paja, está esa construcción en forma de fuente con rocas de colores y un hilo de agua.

Cada piedra tiene grabado un nombre de las 130 víctimas que ha cobrado el conflicto en este grupo desde el 23 de marzo de 1987, paradójicamente cuando se constituyeron como Comunidad de Paz.

Ese año, los 1.360 integrantes, que habitan el área urbana del corregimiento y las veredas La Unión y Arenas, marcaron con vallas las tres entradas a su territorio y sellaron un compromiso de neutralidad con respecto a todos los actores armados.

Guillermo Serna, Miguel Hayo, Samuel Arias, Jaime Quintero, Elías Zapata, José Mario David, Héctor Herrera, Diomedes Mazo, César Pérez, Guillermo Serna... son algunos de los fallecidos registrados con pintura en el monumento.

En estos siete años los líderes han sufrido también múltiples amenazas, robos y desplazamientos por parte de la guerrilla, 'paras' y Ejército.

Los últimos incidentes ocurrieron el 4 de mayo en las veredas Cantarrana y El Barro, en medio de combates entre el Ejército y los frentes 5 y 58 de las Farc. Allí cuatro familias sufrieron la destrucción de

CADA PIEDRA lleva el nombre de una víctima. Julio César Herrera / EL TIEMPO

utensilios y la pérdida de animales domésticos.

También, el 9 de diciembre pasado, presuntos 'paras' les robaron 24 millones de pesos a los líderes del grupo cuando salían de Apartadó en un carro de las Brigadas Internacionales de Paz. El 28 de enero los volvieron a interceptar, esta vez las Farc, y les quitaron 5 millones. Al día siguiente 3 integrantes del consejo interno de la comunidad fueron amenazados.

Según ellos, las intimidaciones y atropellos no solo provienen de los actores armados. Al Ejército lo acusan de retenciones arbitrarias, maltrato y torturas. "Los soldados llegan y dicen que todos los que viven acá son guerrilleros", dice el defensor del Pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, quien se queja de que ningún funcionario ha sido sancionado.

Por su parte, el general Páxelino Latorre, comandante de la Brigada 17, se defiende: "Esa comunidad se ha quejado mu-

cho. Las denuncias que se han formulado en contra de la institución se han investigado, y las otras las está investigando la autoridad civil".

Blindaje de papel

Las únicas defensas de este grupo, más simbólicas que reales, han sido la muralla de silencio que interponen ante los extraños y el acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz y de otras ONG de Derechos Humanos.

Debido al apoyo de esas entidades, consiguieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le exigiera al Estado colombiano brindarles una protección especial.

Sin embargo, representantes de la comunidad dicen que nada de eso se ha cumplido. Por eso instauraron una tutela que la Corte Constitucional falló a su favor hace dos semanas ordenando que se hagan realidad las disposiciones de la Cidh.

"El Ejército tiene el deber de combatir a la guerrilla, eso no lo discutimos, pero comete el error de no distinguir entre combatientes y no combatientes, y está afectando a los campesinos", dice Afanador.

El martes pasado el general Latorre fue notificado de su responsabilidad de salvaguardar los derechos a la vida, integridad, seguridad, libertad de locomoción, dignidad, privacidad de domicilio salvo orden judicial, y el derecho a la intimidad de la Comunidad.

Según él ya tiene listo el manual de procedimientos para los soldados, que incluye la prohibición de retener en guariciones militares a los habitantes de San José y el trato especial que les deben dar en las requisas.